

Los servicios de inteligencia: la historia que se resiste a morir

EDUARDO TOCHE*

En junio del presente año, se aprobó la ley que crea el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia, una exigencia pendiente desde que el presidente Toledo asumió su mandato y que tras peripecias entre dramáticas y cómicas no pudo realizar, como ha sucedido con gran parte del paquete de promesas que hizo cuando le tocó ser el candidato que concentraba el ánimo antiautoritario del fin de siglo pasado.

La democracia exigía una red de acopio de información y especialistas que la analizaran a fin de elaborar diagnósticos precisos, capaces de prever situaciones y escenarios probables para apoyar una correcta toma de decisiones. Totalmente contrario a la herencia dejada por la dupla Fujimori-Montesinos, cuyo Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), bajo el comando del inefable asesor, fue una maquinaria finamente construida para realizar actos de infidencia, manipulación de información, chantaje, corrupción, violaciones a los derechos humanos, narcotráfico y cuantas formas se cruzaran por la cabeza de Montesinos para consolidar la estabilidad no del país ni del Estado, sino del régimen y sus amigos.

Antes incluso de que se difundiera el ahora legendario video Kouri-Montesinos, se sabía que el SIN era el real vértice del poder en el Perú. Desde mediados de la década de 1990, los empresarios no desfilaban por Palacio de Gobierno para recibir diezmos y solicitar favores. Enrum-baban a Chorrillos. Los generales y almirantes no firmaban actas de sujeción ante su comando. Lo hacían contritos frente a un ex capitán acusado de traición a la patria y narcotráfico. Mientras tanto,

el aparato manifestaba su vocación omní-vora y atraía para sí cuanto función le permitiera acrecentar su influencia.

El SIN no siempre fue Montesinos. Lo transformó a su imagen y semejanza luego de una trayectoria en que inicialmente institución y persona se encontraban en las antípodas, una vigilando al otro, para empezar un paulatino acercamiento luego de que Montesinos le sacara las castañas del fuego al general José Valdivia, comprometido por la masacre de Cayara, en una operación que ya mostraba el alto grado de manipulación que había logrado en el sistema judicial peruano. Lo restante fue todo un ejemplo de cómo debía conducirse una persona para llegar en el momento justo a la persona indicada, portando las soluciones urgidas o el dato preciso para poner de lado a los molestosos.

En 1990 fue la tabla de salvación para un compungido candidato Fujimori, cuando parecía que nadie lo salvaba de los juicios sobre propiedades subvaluadas y evasión de impuestos. Fue el inicio del ascenso vertiginoso. Sacó a todos los que le hacían sombra, incluyendo a amigos como Francisco Loayza, y puso cerca del nuevo Presidente a todos aquellos que veía manipulables. Hizo suyo el SIN, al que empezó a adosarle tareas, una tras otra. Creó una oficina que debía vigilar la situación del narcotráfico —dicen que con auspicios de la CIA—, cuyo volumen fue acrecentándose hasta que logró apartar del entorno presidencial a Hernando de Soto y su «doctrina Fujimori», para pasar a convertirse en el único que determinaba lo que debía hacerse respecto a este problema.

Por otro lado, la centralización y el recorte de controles sobre la lucha contra-subversiva, sancionados luego del auto-golpe de abril de 1992 gracias a la dación de los decretos leyes que habían sido materia de conflictos con el Poder Legislativo antes de su cierre, otorgaron una amplia autonomía e influencia de decisiones al SIN, es decir a Montesinos, quien a esas alturas ya había hecho de este organismo su espacio exclusivo. Posteriormente, el SIN no solo participaría en el planeamiento estratégico de la lucha antinarcóticos sino amplió su espectro hacia las operaciones de represión y, asimismo, estas se ampliaron incorporando la lucha contra la delincuencia común.

ENCUENTRO SIN CONTINUIDAD

Pero los servicios de inteligencia peruanos no eran desconocidos para el asesor presidencial cuando copó el SIN a inicios de la década de 1990. Durante los años setenta, el entonces teniente Vladimiro Montesinos había trabajado con el general Edgardo Mercado Jarrín, ministro de Relaciones Exteriores de la primera fase del gobierno militar, y también con el general Enrique Gallegos Venero, ministro de Agricultura en el mismo régimen. Ambos generales habían sido miembros importantes del sistema de inteligencia del Ejército durante la década de 1960 y fueron, entre otros oficiales, los que dieron forma a estos organismos convirtiéndolos en eficaces medios para los objetivos que se propuso su institución. Más aún, recordemos que fueron los coroneles que de una u otra manera integraron este servicio los que tuvieron roles prota-gónicos en el golpe de Estado de 1968, formando parte del ala radical de dicho régimen, como lo fueron además del ya nombrado Gallegos Venero, Jorge Fernández Maldonado, Miguel Ángel de la Flor Valle, entre otros.

Sin embargo, entre lo que fue el sistema de inteligencia hasta mediados de los años setenta y lo visto durante los noventa hay un mar de distancia que solo sugiere una historia de la descomposición institucional paralela a la propia crisis del Estado, que empezó a evidenciarse desde aquellos tiempos. Al respecto, puede ser sorprendente afirmar que la Inteligencia, como la conocemos actualmente, es un tipo de actividades que solo se organizaron como tales finalizada la Segunda Guerra Mundial, y en nuestro país no la tuvimos sino a fines de la década de 1950.

Más aún, siempre se la vio como algo que concernía estrictamente a los militares. Es así que primero se organizaron los servicios de las instituciones que forman parte de las fuerzas armadas y policiales, para luego, recién en los años setenta, bajo un régimen también militar, organizar un débil servicio nacional que no estará articulado a los organismos sectoriales sino hasta los noventa, cuando Montesinos los coloca bajo su espectro de influencia aprovechando las normas

fujimoristas que permitían esta centralización y, sobre todo, su gran capacidad para persuadir y cooptar una jerarquía militar cada vez más mediocre.

PREHISTORIA

En efecto, hasta los años cincuenta lo que tuvo el Estado peruano fueron, de una u otra forma, grupos dedicados al «soplo-naje», en parte formados por elementos alistados en la «policía científica» —llamada así por el uso de «técnicas» para obtener información de los detenidos—, en parte por individuos reclutados de los espacios marginales, todos ellos comandados generalmente por funcionarios civiles de probada lealtad a los gobernantes y reconocido gusto para ejercer siniestras prácticas contra los delincuentes comunes y los enemigos del régimen al cual se debían.

Eran los Damián Mústiga, el cancerbero de todos los gobiernos entre las décadas de 1920 y 1930, que se desempeñó como jefe de la famosa «policía política» de entonces, obsesionado con la captura de Haya de la Torre. Años más tarde, tendríamos al repulsivo Director de Gobierno del general Odría, Alejandro Esparza Zañartu, recordado por Luis Felipe de las Casas como «un criollo advenedizo e improvisado sayón conocido más por socorrido vendedor de pisco malo sin otro título que paisano del entonces Ministro de Guerra (Zenón Noriega)». Es el mismo que inmortalizó Mario Vargas Llosa con su personaje Cayo Bermúdez en *Conversación en La Catedral*. Recuerda el novelista que este sujeto, de cara aburrida, aperga-minada, con vocecita sarcástica que hablaba con faltas gramaticales y cuerpecillo esmirriado, fue el primer Rasputín que debió enfrentar en su vida.

Esparza tenía sus segundos, menos conocidos pero igualmente repelentes como su jefe. Por ejemplo, *Cucaracha*, jefe de la Penitenciaría cuando al aprista De las Casas le tocó purgar una de sus incontables detenciones: «para desgracia su nombre de pila y el mío coincidían [...] En nuestra sociedad tradicional, no

dejan de haber en las más honestas familias algunas ovejas negras, desde maricones hasta cabrones».

Esos eran los hombres del Presidente. No se necesitaba individuos de muchas luces ni escrúpulos para que realizaran los imprescindibles «trabajos sucios». Su hoja de servicios solo debía garantizar la adscripción total al gobernante, suficiente estómago para aguantar las tareas encomendadas, los contactos necesarios en el submundo y, sobre todo, silencio respecto de lo que averiguaban de los amigos así como información oportuna y por los canales establecidos acerca de los enemigos.

ANTECEDENTES

Todo esto fue cambiando profundamente a lo largo de la década de 1950. Finalizada la Segunda Guerra Mundial sobrevino la Guerra Fría, y con ella, la expansión de una tensión mundial que se reflejó en la competencia entablada por las dos superpotencias sobre la primacía nuclear y la aparición de nuevas formas de guerrear en los territorios que empezaban a descolonizarse: la guerra popular prolongada, la guerra irregular o, simplemente, la guerra de guerrillas. Este acontecimiento determinó un corte decisivo sobre lo que incumbía a los militares, estableciendo un escenario bélico perpetuo, en todos los terrenos y frente a un enemigo que no podrá visualizarse. Así, lo que vino a presentarse desde la lógica del conflicto que había intuido Lenin y desarrollado en su máxima expresión Mao fue determinante para empezar a concebir las tareas de Inteligencia como un aspecto fundamental en las estrategias para derrotar a este nuevo enemigo, es decir, el ubicuo y mortal comunista.

Era, pues, una guerra mundial y había que enfrentarla bajo esa premisa. Para ello, la organización de los ejércitos contempló seriamente la necesidad de fundar escuelas y unidades que se dedicaran exclusivamente a ubicar, seguir y eventualmente sacar del camino a potenciales agentes del comunismo. En el caso de los Estados Unidos, uno de estos centros de entrenamiento fue Fort Holabird.

En aquel lugar se dio prioridad, como era lógico, a las actividades que debían realizarse en el continente europeo, y les interesó muy poco o nada lo que podría suceder en el hemisferio en tanto consideraban que por estos lares no se ubicaba ningún objetivo comunista, salvo la posibilidad remota de que se bloquease el canal de Panamá en un eventual inicio del conflicto con los soviéticos. Agregado a ello, los agentes estadounidenses también consideraron importante rastrear a los supuestos infiltrados en su territorio, algo que se generalizó hasta lo grotesco tomando el nombre de macartismo.

En efecto, los años iniciales de la Guerra Fría fueron para los estadounidenses un periodo de prueba y error, de tanteos, en el que no podían mostrar importantes resultados y se enfrascaban, más bien, en discusiones bizantinas como, por ejemplo, si los agentes sembrados en Europa debían o no usar uniforme.

Mientras tanto, otra potencia que surgió victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, Francia, debía barajar la multiplicación de rebeliones anticoloniales en sus territorios de ultramar. Los jefes de las legiones extranjeras veían atónitos cómo sus tropas de élite eran pulverizadas por contingentes de esmirriados campesinos en Indochina y Argelia, sin atinar a dar con una fórmula en la que usando los procedimientos de la guerra regular se pudiera desarticular el planteamiento guerrillero de los vietnamitas, camboyanos y argelinos.

Pero no todos quedaron inmovilizados ante el devastador espectáculo. Hubo un general, Raoul Salan, cuyo prestigio solo era comparable con el de su colega Charles De Gaulle, que tomó el toro por las astas y llegó a la conclusión de que la única forma de enfrentar a las tropas irregulares era empleando sus mismos métodos. Salan fue un fiel continuador del desprecio que los militares colonialistas franceses, una combinación de guerreros y administradores, sentían por los políticos asentados en la metrópoli parisina, y fue este el sentimiento que radicó en la base de su decisión de responder con terrorismo al terrorismo, agregándole la necesidad de satisfacer las demandas de la población para ganarla a la causa y así «quitarle el agua al pez», convirtiéndose en el líder natural de los oficiales que

formaron la OAS, el grupo ultranacionalista que manifestó su oposición a las concesiones independentistas que otorgó De Gaulle a los argelinos.

Entonces, teníamos dos concepciones sobre cómo enfrentar al comunismo: una que partía de una tradición vaga y llena de suposiciones que esperaban confirmarse en la acción —la estadounidense—, y otra que fue puliéndose de acuerdo a una larga experiencia colonial y el trato cotidiano directo con la población nativa —la francesa—.

Esto coincidió con un momento de transición en la doctrina militar peruana. Durante los años cincuenta del pasado siglo, los oficiales peruanos empezaron a dirigirse hacia los Estados Unidos para especializarse, dejando paulatinamente, aunque no del todo, de hacerlo hacia Francia, hasta entonces el *alma mater* del Ejército peruano, cuya reorganización había sido realizada por sucesivas misiones militares que provinieron de este país en las décadas anteriores.

Remitiéndonos a lo dicho líneas arriba, parece que los militares peruanos no tuvieron mucho que aprender de los estadounidenses. Cuenta el general Marcial Romero Pardo, uno de los más prominentes francófilos del Ejército, que los peruanos iban «a pasear» a Estados Unidos y no adquirirían ningún conocimiento nuevo. Al parecer sucedió lo mismo con aquellos que tuvieron como destino Fort Holabird, el centro de instrucción en inteligencia y contrainteligencia, en donde los peruanos tuvieron poco que aprender a pesar de tener demandas urgentes aunque no consideradas importantes y hasta desconocidas por los estadounidenses.

En ese entonces, los revolucionarios cubanos aún no habían derrotado a Batista para convertirse en uno de los motivos de preocupación de los estadounidenses. Pero eso no significaba que los militares peruanos hayan desatendido la formación de focos conspirativos que contenían una alta probabilidad para desarrollar acciones insurreccionales. La durísima represión ejercida por la dictadura odriista llevó a que grupos cada vez más radicalizados del APRA, con profundos cuestionamientos a su dirigencia luego del comportamiento que mostró durante los

hechos de octubre de 1948, prestaran cada vez mayor atención a la organización de acciones armadas para llevar a cabo la ansiada revolución antioligárquica.

Así, hubo dos ámbitos que fueron materia de seguimiento por los militares peruanos para debelar las sublevaciones planeadas por los apristas radicales. Uno fue México, en donde los peruanos desterrados contactaban con otros grupos revolucionarios, especialmente los cubanos. El otro fue Bolivia, país en donde una revolución finalmente controlada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y apoyada por la oficialidad joven había tenido como uno de sus resultados la desaparición de las fuerzas armadas, algo que alarmó sobremanera a sus colegas peruanos y que se potenció al tenerse la certeza de que por esa frontera se había iniciado un constante contrabando de armas, sumadas las coordinaciones que realizaban los apristas con dirigentes del MNR para extender la ola revolucionaria hacia nuestro país.

DESARROLLO AUTÓNOMO

Así es como fue configurándose la necesidad de organizar y desarrollar labores de Inteligencia. Fue un coronel de caballería quien dio el primer y decisivo impulso a esta tarea: Juan Bossio Collas. Este oficial había estado en Fort Holabird y, además, fue un notable instructor en la Escuela Superior de Guerra, en donde tuvo como alumnos más cercanos a los jóvenes oficiales —que luego serían parte del ala radical del gobierno reformista— que condujeron las fuerzas armadas desde 1968, como Jorge Fernández Maldonado, Leonidas Rodríguez Figueroa, Rafael Hoyos Rubio, Luis La Vera Velarde, Raúl Meneses Arata, entre otros.

El coronel Bossio fue destacado como agregado militar a las embajadas peruanas de México y Bolivia, precisamente para conocer lo que estaban planeando los potenciales insurrectos que se hallaban en estos países. En 1958 fue nombrado como jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Luego se crearía la Escuela de Inteligencia del Ejército, con lo que la parte organizativa del servicio quedó expedita.

Pero esta es una parte de la historia. La otra tuvo como protagonistas a los casi últimos oficiales peruanos que continuaron sus estudios en Francia o, más precisamente, en Argelia. El ya nombrado general Marcial Romero Pardo había estado en aquella colonia francesa en 1958, para observar el desarrollo de la guerra. Regresó al Perú convertido en un ferviente admirador de la estrategia implementada y del inventor de esta, el general Raoul Salan, «seis estrellas en la manga, mil y una condecoraciones y un tremendo prestigio».

Salan había percibido que si no ponía a la población de su lado, las posibilidades de ganar a los insurrectos eran remotas. Amoldó a estas circunstancias las premisas clásicas de la «guerra total», considerando que al comunismo se le ganaba fomentando el desarrollo y satisfaciendo las necesidades básicas de la población. Solo luego de estas acciones políticas venían las acciones militares imprescindibles para quebrar la organización subversiva.

Pero más importante que la visita de Romero fue la instrucción que en dicho lugar recibieron algunos oficiales peruanos, entre los que destacó el entonces teniente coronel Enrique Gallegos Venero, tal vez el primero que expuso con claridad y finalmente aplicó los conocimientos antisubversivos que asimiló de sus instructores franceses.

En efecto, desde fines de la década de 1950 las revistas militares, en particular la que editaba la Escuela Superior de Guerra, incrementarán en forma significativa las páginas dedicadas a este tema, y uno de los colaboradores más asiduos será precisamente Gallegos. Casi inmediatamente lo veremos en acción. Ocurrido el golpe de Estado de 1962, que tuvo entre uno de sus principales promotores tras bambalinas al ahora general Juan Bossio, los militares tomaron la decisión de aplicar un plan piloto de reforma agraria en los valles de La Convención y Lares, lugares de alta movilización campesina en los que había arraigado el sindicalismo revolucionario promovido por Hugo Blanco.

Fue Enrique Gallegos, como funcionario del Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IRAC), quien ideó la intervención y condujo las acciones.

Paralelamente a las operaciones represivas, empezó a organizarse un plan de desarrollo para la región en los altos niveles de la administración del Estado. En octubre de 1962, confluyeron representantes de todos los ministerios y del IRAC en una reunión llevada a cabo en el Departamento de Investigación y Desarrollo del Cuartel General del Ejército. Allí se contempló la necesidad de satisfacer las demandas de los campesinos de La Convención, como parte esencial de la estrategia que debía aplicarse contra los insurgentes comunistas.

Poco tiempo después, los grupos de oficiales formados en Francia y aquellos influidos por el general Bossio se juntaron en los órganos de inteligencia militar, siendo ellos los que dirigieron la rápida debelación de los retos subversivos que hacia mediados de los años sesenta plantearon el MIR y el ELN. Luego reaparecerán durante el gobierno de facto del general Juan Velasco impulsando un proyecto en el que se combinó la seguridad con el desarrollo, proponiéndose como una novedosa y aparentemente consistente forma de alcanzar el desarrollo material por una vía que equidistaba de los modelos capitalista y comunista que planteaban las potencias mundiales de entonces.

AGOTAMIENTO

Como hemos señalado, la Inteligencia siempre había sido considerada como una tarea esencialmente militar, a lo que habría que agregar un componente esencial para tener una idea cabal de las características que adquirió en países como el nuestro: fue organizada para dar cuenta del enemigo interno, es decir, el subversivo comunista que amenazaba con quebrar «las bases de la civilización occidental y cristiana».

En ese sentido, fue muy relativa la importancia que se le otorgaba a la construcción de un sistema nacional de inteligencia que respondiera a los criterios del Estado en su totalidad y no a su sector armado. Es cierto que entidades como el SIN tuvieron presencia en las altas esferas de decisiones, especialmente en la década de 1970, pero fueron aparatos que pronto devinieron en ineficaces y altamente burocratizados.

Un ejemplo palpable de ello fue lo ocurrido a fines de los años setenta, cuando en pleno proceso de transición democrática luego de doce años de dictadura militar irrumpió Sendero Luminoso con su guerra popular, sin que nadie se percatara de lo que estaba sucediendo y el derrotero que tendría dicha amenaza que se inició con una pequeña acción en el lejano poblado de Chuschi, en Ayacucho, y terminó convirtiéndose en el proceso más violento de la historia republicana del Perú.

A pesar de ello, los permanentes celos entre civiles y militares impidieron el fortalecimiento de una entidad que centralizara la información necesaria y la procesara para la generación de decisiones certeras. Durante la década de 1980 hubo dispositivos que intentaron mejorar esta situación, pero los resultados estuvieron lejos de ser lo deseable: los gobernantes civiles trataron sin éxito de resolver una situación excepcional dentro de los marcos establecidos por la Constitución, mientras, por otro lado, la jerarquía militar consideraba indispensable la suspensión de tal encuadre jurídico para la derrota de la subversión. Como sabemos, estos últimos se impusieron y una consecuencia de ello fue el régimen autoritario que vimos actuar en la década final del siglo XX.

Con esta experiencia, es evidente que la Inteligencia ya no puede ser lo que fue: ni el apoyo analítico para combatir a la subversión comunista como tarea casi exclusiva, ni el aparato básico para formar la más grande red de corrupción que haya existido en el país. Sabemos lo que no queremos, pero no tenemos claro hacia dónde dirigirnos.

* Investigador de desco.